

Relaciones entre EE. UU. y América Latina en una segunda administración Trump

Héctor Schamis *

Los latinoamericanos a menudo creen que Washington no se preocupa por ellos. Una idea con poco fundamento material, que quizás nunca ha estado más lejos de la verdad que hoy.

Considere esto: el 14 de enero, al dejar el cargo, la administración Biden notificó al Congreso su intención de levantar la designación de EE. UU. de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Como parte de un acuerdo facilitado por la Iglesia Católica, el gobierno cubano prometió liberar prisioneros políticos y el gobierno de EE. UU. se comprometió a aliviar cierta presión económica sobre la isla, invirtiendo el enfoque de la primera administración Trump, tal como se describió en el memorando de junio de 2017. Al día siguiente, 15 de enero, Marco Rubio compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para su audiencia de confirmación como Secretario de Estado. Fue contundente en su testimonio: “En nuestro propio hemisferio, los déspotas y narcoterroristas se aprovechan de las fronteras abiertas para impulsar la migración masiva, traficar con mujeres y niños, y inundar nuestras comunidades con fentanilo y criminales violentos.” Desde el primer día, por lo tanto, la administración Trump entrante ha abordado el tema de Cuba y otras dictaduras en todo el hemisferio. El entonces designado secretario elaboró sobre esta afirmación general. Desafió la decisión de Biden de manera directa: “Cuba ayuda a organizaciones como las FARC y el ELN en Colombia,” argumentó, “es amiga de Hamas y Hezbollah, tiene vínculos con Irán, alberga estaciones de espionaje para China y Rusia, y esconde a fugitivos de EE. UU.” Una vez confirmado, reinstauró la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo. Rubio también tuvo palabras contundentes para el régimen venezolano, criticando a la administración Biden por haber “sido engañada sobre una elección libre” en la que, al final, Maduro proclamó falsamente la victoria sobre Edmundo González. Condenó la política de alivio de sanciones por la cual “empresas como Chevron están proporcionando miles de millones de dólares a las arcas del régimen.” “Venezuela,” concluyó, “está gobernada por una organización narcotraficante que se ha apoderado de un estado-nación.” Criticó al régimen nicaragüense por perseguir a la Iglesia Católica y silenciar voces disidentes. Lo acusó de contribuir a la crisis migratoria porque “el régimen nicaragüense está permitiendo que la gente vuele a Nicaragua sin visas desde cualquier parte del mundo y luego transite hacia los Estados Unidos.” También condenó al régimen de Ortega por invitar a Rusia a “establecer una presencia militar en Nicaragua, lo que representa una amenaza para nuestra seguridad nacional que debe ser abordada.” Así, el Hemisferio Occidental ocupa un lugar crucial en la agenda de la segunda administración Trump. Que Centroamérica haya sido elegida como el destino del Secretario Rubio para su primer viaje al extranjero habla de ello; la posterior disputa entre Trump y Petro sobre las deportaciones lo enfatiza aún más. Con amenazas de una guerra comercial comenzando y choques migratorios ya desarrollándose, América Latina ciertamente ha entrado en el centro de atención.

Sin embargo, esto no se debe solo a desafíos inextricables como la migración irregular y el tráfico de drogas. Los vecinos del sur de EE. UU. también son socios potenciales en una variedad de temas, desde el fortalecimiento de las cadenas de suministro en alimentos, minerales y energía, hasta la defensa de la democracia y los derechos humanos, así como la promoción del nearshoring y el comercio intra-regional. La interacción de estos temas es clave para comprender tanto los riesgos como las oportunidades. Esa debería ser la conversación en las Américas. De hecho, la inmigración está en la parte superior de la agenda de política exterior, ya que es un hecho establecido que varios de estos flujos migratorios han sido promovidos y desplegados por el crimen organizado, a menudo en colusión con gobiernos hostiles a EE. UU., como el de Maduro.

Estos conglomerados criminales integrados y diversificados—ese es su “modelo de negocio,” si se quiere—se han convertido en agentes parastatales. Parte de la política exterior de Venezuela se subcontrata a ellos. Estas entidades primero expulsan a las personas más pobres y vulnerables de sus propios países, pueblos y hogares, y luego las trafican hacia el norte a través del Darién, justo como trafican con cocaína, oro y coltán. Las caravanas que van en esa dirección hoy, tanto como las que se dirigían al sur en el pasado, están impregnadas de crimen organizado, mezcladas con verdaderos migrantes y con la población latina que una vez estuvo en EE. UU. De ahí la ansiedad sobre la migración entre estas comunidades, un tema que arroja luz sobre el robusto voto latino por Trump el pasado noviembre. Un ejemplo relevante es el caso del “Tren de Aragua,” una organización que opera a lo largo del continente. Como en Chile, con el asesinato de un oficial naval venezolano exiliado.

Como en EE. UU., con sus acciones criminales en Colorado, Nueva York y Texas, entre otros estados. Esto ha alertado a las autoridades: el tema migratorio no se trata tanto del mercado laboral como de la seguridad nacional. La administración Biden también lo había visto así. De hecho, en 2024, las deportaciones alcanzaron el récord más alto desde 2014, entonces bajo Obama. En otras palabras, tanto Obama como Biden deportaron a más extranjeros que Trump durante su primera administración. Si ese es el caso, debería haber apoyo bipartidista para políticas de inmigración que controlen las fronteras de la nación y regulen los flujos migratorios de manera racional, como propone Trump. El crimen organizado y la autocracia han ido de la mano en el hemisferio. Ambos problemas deben abordarse simultáneamente. Esta relación ha debilitado seriamente el estado de derecho, creando un entorno de ilegalidad e inseguridad, que también fomenta la migración y permite actos terroristas.

Curiosamente ausente de esta discusión está el hecho de que en marzo de 2020, un tribunal federal en el Distrito Sur de Nueva York acusó a altos funcionarios de la dictadura venezolana y ofreció recompensas por información que condujera a su captura. Maduro y 14 miembros más de su régimen fueron acusados. El caso detalla los vínculos de la dictadura venezolana con el Cartel de los Soles y la disidencia de las FARC en un crimen que se tipifica como “narcoterrorismo.” A través de esto, el régimen de Maduro exporta autocracia. Al mismo tiempo, las agencias federales de Estados Unidos han documentado ampliamente el papel de Cuba en mantener a Maduro en el poder. Se ha reconocido que su

seguridad personal, el control aeroportuario, el registro electoral y la contrainteligencia militar, incluido el tortura de oficiales disidentes en cautiverio, están en manos del aparato de inteligencia cubano. Sin Cuba, Maduro habría caído hace mucho tiempo. Por propiedad transitiva, el régimen cubano también patrocina (narc) terrorismo en Caracas. Dado lo anterior, debería haber una conversación sobre democracia y el estado de derecho en la región. En la medida en que solo la democracia puede sostener el estado de derecho, confrontar a las autocracias que han sido capturadas por el crimen organizado requiere abordar estos temas de manera concurrente. No existe tal cosa como tratar un tema a la vez cuando se trata de las múltiples consecuencias del crimen organizado. Asimismo, la pobreza generalizada también juega un papel. En un momento de persistente charla sobre aranceles y otras restricciones comerciales, el desarrollo en las Américas también aparece como una condición necesaria para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional de EE. UU. Porque, si el objetivo es reducir las presiones migratorias, mantener empleos en casa en América Latina es parte de la ecuación.

El acceso al mercado de EE. UU. para los bienes latinoamericanos debería, por lo tanto, ser una condición necesaria. Ese es, de hecho, el enfoque de la “Ley de las Américas,” un proyecto de ley presentado al Congreso el pasado marzo que busca establecer un mecanismo para una asociación comercial permanente en el hemisferio. Bipartidista y bicameral, el proyecto representa un esfuerzo multimillonario para expandir el comercio intrahemisférico, generando oportunidades de inversión y creando empleos, abordando así las causas fundamentales de la migración. Los legisladores reconocen que, a pesar de los fuertes lazos que unen al hemisferio, Estados Unidos no ha ofrecido al resto de las Américas una alternativa convincente a la proyección económica de China. Por lo tanto, una agenda integral sobre migración, drogas ilegales y seguridad nacional debe incluir también el tema del estado de derecho, la pobreza y el desarrollo en las Américas.

@hectorschamis

**Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y no necesariamente representan las políticas o posiciones del Center for Latin American Convergence (CCLatam) como organización.*